



EL COOPERATIVISMO AGRARIO EN NICARAGUA

MARVIN ORTEGA

Economista nicaragüense e Investigador Social. Profesor de la Universidad Centroamericana en Nicaragua.

I. COOPERATIVISMO Y MODELOS DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS

La política agraria del gobierno de Nicaragua, después de julio de 1979, destaca la promoción a la cooperativización de base campesina, conjuntamente con las empresas estatales, como los ejes para la transformación de las estructuras productivas y de tenencia de la tierra heredadas del somocismo. Tal política ha estimulado la demanda campesina por las cooperativas.

Las cooperativas agropecuarias, como reivindicación campesina, son, por eso mismo, un fenómeno reciente en Nicaragua, que ha tomado fuerza en los últimos ocho años. En él se expresan, de un lado, las reivindicaciones por la tierra, por el control de los recursos productivos y de sus propios excedentes, de la mayoría del campesinado; así mismo son expresión de las concepciones políticas e ideológicas que han guiado al gobierno revolucionario en sus relaciones con el campesinado.

Este movimiento cooperativista, al irrumpir en el campo en 1979, coincide con el surgimiento de nuevas e importantes manifestaciones de la lucha de clases en el agro, que cuestionan la propiedad y el poder de los grandes terratenientes.

Paralelamente acompaña el nacimiento de

la red de organizaciones comunales y productivas de los pequeños productores, con lo que se consolida el "movimiento campesino" (1) por primera vez en la historia del país.

No niega lo anterior, que antes de 1979 existieran cooperativas agropecuarias cuya base fuera campesina. Se remite más bien a destacar que esas cooperativas fueron una experiencia desde arriba, programada, dirigida y controlada por el Estado. No se trató de la culminación más o menos exitosa de un proceso de luchas campesinas, ni la expresión de los antagonismos entre campesinos desposeídos y latifundistas, resueltos por la vía de los hechos. Más bien fue una acción preventiva del Estado que utilizando las aspiraciones de sectores campesinos parceleros por el control de su propio excedente, promovió este tipo de organizaciones para mantener el conflicto agrario dentro de límites controlables. O sea, se utilizó la cooperativización como un mecanismo más para descomprimir el conflicto agrario en medio de los campesinos propietarios, mientras el modelo proletarizaba a los campesinos sin tierra, obligaba a emigrar a una parte de éstos a la ciudad, como fuerza de trabajo de reserva, o a la frontera agrícola como productores de alimentos.

Vistas en el tiempo, las primeras coopera-

tivas agropecuarias surgieron en Nicaragua a mediados de la década del setenta patrocinadas por la Alianza para el Progreso. Fueron concebidas dentro de referencias ideológicas que defendían la propiedad privada individual sobre los medios de producción, frente a las corrientes "radicales" que en América Latina reivindicaban la organización asociativa. En esencia su concepción estaba ligada al enfrentamiento con las alternativas revolucionarias que planteó el triunfo de la revolución cubana a fines de 1959.

De ahí que no se diseñaron como cooperativas de producción y se pusiera el énfasis en los servicios, adoptando el nombre genérico de Cooperativas de Responsabilidad Limitada (RL). Estas cooperativas, ni en sus estatutos, ni en sus acciones concretas se plantearon la colectivización de la tierra. Sin embargo no rechazaban el uso en colectivo de otros medios de producción, especialmente equipos y maquinarias que no estaban al alcance del pequeño parcelero individual. Unas pocas llegaron a poseer colectivamente el beneficiado del café o el desmote del algodón, servicios de comercialización, comisariatos, maquinaria agrícola y medios de transporte.

Su organización y desarrollo estuvo comúnmente ligada a un cultivo de exportación, especialmente el café y el algodón, productos alrededor de los cuales se concentraban los más importantes conflictos por la tierra en el país, y de los que prácticamente dependía la economía nacional.

El territorio en el que operaba una cooperativa era relativamente extenso, ocupando varios municipios, organizándose los socios en zonas, de acuerdo a su ubicación territorial. La cooperativa era presidida por una junta directiva electa por los socios. Para la administración, y en ocasiones para la asistencia técnica, se auxiliaban de funcionarios profesionales, contratados especialmente para tal fin.

La principal actividad de ellas fue la gestión y el manejo del crédito rural, el que era solicitado al banco por la cooperativa, que luego lo asignaba a su socio.

Sobre la tasa de intereses estipulada por el banco la cooperativa cobraba un porcentaje extra, cantidad con la que creaba sus fondos de reserva y acumulación, además de cubrir los gastos administrativos y de servicios en que la gestión incurría.

El uso del crédito de la cooperativa no evitó que los más pequeños y con menos recursos tuvieran que recurrir al préstamo usurero, a la venta por adelantado, a la mediería, o caer en la expropiación de su pequeña propiedad campesina, tanto por que fueron los que menos accedieron a los servicios a su propia cooperativa, como por el hecho de que el préstamo del banco no cubría todas sus necesidades productivas y de producción dejándolos siempre ante la necesidad de endeudarse. Sin embargo, permitió que los campesinos medios y ricos integrados a las cooperativas, excepto dieran a la cartera de crédito en condiciones más favorables que las establecidas por el prestamista usurero.

Desde el Estado estas cooperativas recibieron un apoyo muy débil que no avanzó más allá de la retórica formal, y no estuvo ajeno a la represión institucional para mantenerlas subordinadas al modelo agroexportador (CIERA: 1987). La principal fuente de recursos para su financiamiento les provino de organismos de la empresa privada y grupos religiosos, nacionales y extranjeros.

De ahí que las cooperativas no fueran capaces de promover un movimiento capaz de ser asumido por el campesinado como una reivindicación propia, integrado a otras formas de luchas campesinas que realizaron en la época. Sin embargo, antes del triunfo se pudieron organizar cuarenta y dos grupos cooperativos RL, en los que participaron activamente un poco más de 9.200 campesinos (BNN: 1978).

Por sus características, y especialmente por el surgimiento de un movimiento cooperativista, entre el mismo campesinado, a partir del año setenta y nueve, estas organizaciones de productores fueron muy menospreciadas por el Estado, califi-

cadadas como burguesas por su pasado, y apodadas con el mote de cooperativas "tradicionales", lo que refleja en cierta medida un tono despectivo a ellas, aunque la experiencia de cada una es muy rica y apreciable.

Sin embargo, el apoyo al campesinado que ha promovido la revolución, además de la vitalidad especial de las RL para sobrevivir sin mayor apoyo estatal, ha permitido la reactivación de muchas cooperativas de este tipo, o el surgimiento de otras, registrándose en la actualidad un reconocimiento a las virtudes de este modelo cooperativista (DGRA: 1986). No todas ellas tienen un perfil agropecuario bien definido, combinando en diversos grados, dentro de la cooperativa las actividades agrícolas y ganaderas con las artesanales, servicios, ahorro y préstamo y abastecimiento.

Una situación totalmente diferente se planteó con el triunfo de la revolución popular sandinista. Estimulado por las victorias populares el campesinado se movilizó contra los terratenientes, en acciones masivas que trastocaron el perfil de tenencia de la tierra, y la organización tradicional de la producción, surgiendo nuevos modelos de producción en cooperativas.

Aquí, posiblemente, el hecho más relevante en términos del cooperativismo, es la ausencia del Estado como órgano impositivo en la génesis de las cooperativas. Dos factores contribuyeron a este acontecimiento. Por un lado, al derrumbarse el somocismo, se liberaron las fuerzas reprimidas del campesinado que reivindicaban la tierra en la que había trabajado por años; y por otro lado, el nuevo Estado revolucionario, que les había planteado la organización de cooperativas en su programa de luchas, no asumía totalmente el aparato estatal, y su actuación era aún la de guerrilla insurgente, donde las energías espontáneas de las masas se imponían en sustitución de un orden recién destruido y de otro que aún no se consolidaba.

Las primeras cooperativas que se organi-

zaron pos-triunfo lo hicieron en tierras de grandes empresas capitalistas, invadidas por sus propios obreros y los campesinos pobres de la zona que se encontraban insurreccionados. Tomaron el nombre de Cooperativas Agrarias Sandinistas, o Comunas Agrarias Sandinistas (CAS), y comenzaron a producir como unidades de producción colectivas. Posteriormente se organizaron Colectivos de Trabajadores (CT), Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y Cooperativas de Surco Muerto (CSM).

Es importante señalar, que las cooperativas CAS, que son las primeras que surgen, irrumpen, comúnmente, en las zonas de vieja tradición de lucha por la tierra y de dura represión de parte de la guardia somocista (CIERA: 1985). Algunas de ellas conquistaron la tierra antes de la insurrección, o durante la misma, para consolidarse una vez consumada la derrota militar del somocismo.

El fin de la dictadura y el inicio de la organización del nuevo Estado revolucionario, se tradujo en el campo en una generalización de las luchas campesinas por la tierra. Los campesinos invadieron tierras de conocidos somocistas, fincas abandonadas y/o propiedades que habían estado reivindicando mucho tiempo atrás. El movimiento continúa siendo espontáneo en lo fundamental, aunque comienza a sentirse la presencia organizada del FSLN y del Estado impulsando la demanda campesina, y ordenando el proceso de organización de la producción.

Las cooperativas que se iban creando elegían sus directivos, los que se ponían a la cabeza de la organización, sin contratar técnicos administrativos o asesoría técnica; este modelo de organización de las CAS ha persistido en lo fundamental hasta hoy. Hay que señalar, sin embargo, que las CAS han gozado de un gran apoyo estatal, tanto en la planificación de la producción, como en la capacitación, crédito y asistencia técnica, que en muchas ocasiones se han convertido en ingerencias externas a la cooperativa, con efectos distorsionantes en su vida interna. (2)

Típicamente las CAS están formadas por campesinos pobres o ex-obreros agrícolas (3), utilizan la tierra, el crédito y la asistencia técnica colectivamente y así mismo comercializan la producción, la maquinaria, las instalaciones, y en general las inversiones las realizan colectivamente, y sólo en los últimos dos años han surgido dentro de las CAS áreas de autoconsumo individual, que la cooperativa presta a sus asociados, especialmente cuando no está especializada en la producción de alimentos. (4) Más del 90% de las CAS se han organizado en tierras entregadas por la Reforma Agraria, en territorios bastante compactos y generalmente en tierras de muy buena calidad.

Las CAS, que fueron las primeras cooperativas surgieron con el triunfo de la revolución, no son las únicas ni las que más se han desarrollado. Para los campesinos parceleros, una vez asentado el nuevo poder, se plantearon las Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS), pensadas como modelos transicionales hacia formas cada vez más asociativas (DGRA: 1986). Estos pequeños propietarios representan cerca de un tercio del campesinado nacional, y sobrevivieron a la expropiación campesina anterior a la revolución, sobre la que se expandió la producción capitalista, por la vasta frontera agrícola que posee el país. (5)

A diferencia de las CAS, surgidas en sus orígenes muy espontáneamente, y en las que comienza a tomar cuerpo el movimiento campesino, las CCS son diseñadas y promovidas por el Estado y el naciente movimiento campesino, que comienza orgánicamente a ponerse al frente de las reivindicaciones gremiales. Se toman como puntos de partida referenciales diferentes tipos de organizaciones surgidas post-triunfo, donde se nuclean campesinos pobres con el fin de conseguir tierra y créditos financieros para trabajar. En ese momento, el Estado, sumamente débil, pone su principal énfasis en pro de la organización campesina ampliando la asistencia técnica y la extensión y masificación del crédito rural (6), no sólo para los campesinos sin tierra, sino también para los campesinos parceleros sometidos tradicio-

nalmente a la usura del terrateniente y/o comerciantes prestamistas (MALDIER, C y MERLET, M: 1986). Surgen así las CCS, uniendo a pequeños propietarios de tierra, y a los que no la poseían pero eran agricultores, alrededor de una alternativa para conseguir crédito y tierra en condiciones favorables de producción, convirtiéndose con el paso del tiempo en la más numerosa expresión de la colaboración en la producción campesina.

Las CCS no son cooperativas compactas, por el contrario, sus socios se diseminan en el territorio, separados entre sí por otros productores no organizados, teniendo como base una comarca (7) campesina. En esto se diferencian de las cooperativas RL, que normalmente tienen sus socios en diversos municipios.

Las CCS también eligen una directiva entre sus socios, cuya función principal es la gestión del crédito ante el sistema financiero, aunque a diferencia de las RL cada socio retira individualmente su crédito y asume ante el banco el compromiso de reembolsarlo. Las CCS, también a diferencia de las RL, no contratan una asesoría técnica o un equipo administrativo. Además muchas de ellas colectivizan parcelas cedidas por el Estado o alquiladas a terceros, o compran colectivamente medios de producción, especialmente maquinaria agrícola y medios de transporte. (8)

A la par de estos dos modelos cooperativistas (9), han surgido cooperativas intermedias, entre ellas: los Colectivos de Trabajo (CT) y las Cooperativas de Surco Muerto (CSM).

Los CT, se parecen mucho a las CAS, pues utilizan los medios de producción y el crédito colectivamente. Normalmente, y a diferencia de las CAS, los CT son pequeños núcleos de campesinos de base familiar, o grupos de obreros de una empresa estatal o privada que trabajan la tierra colectivamente. Como forma de organización cooperativa los CT surgen en el primer año de la revolución, cuando comenzaron a formarse las empresas estatales y se vieron en la necesidad de buscar como

retener la fuerza de trabajo durante el tiempo muerto de la agricultura, frente a las expectativas de los asalariados agrícolas de acceder a su propia parcela con la Reforma Agraria.

Las Cooperativas de Surco Muerto son CCS que han recibido tierra individual de la Reforma Agraria, y por eso mismo surgen después de 1981 cuando se aprueba la Ley de Reforma Agraria. La propiedad que recibe la cooperativa se divide en parcelas individuales, a las que no se le

pone cerco, y para diferenciar el lote de cada propietario se deja entre uno y otro un 'surco muerto', sin sembrarse, que marca la frontera entre cada propietario.

II. OBJETIVOS DEL COOPERATIVISMO AGRARIO

Cualquier referencia a los objetivos del cooperativismo tiene que tomar en cuenta dos visiones: la del Estado y las instituciones que lo promueven, y la de los campesinos. En Nicaragua no existió durante el



somocismo una conciencia entre promotores e integrantes de las cooperativas, y más bien, los intereses de ambos discurririeron por vías diferentes.

En el caso del cooperativismo RL los objetivos que se proponía el Estado y las instituciones que lo promovieron, y los campesinos que se integraron a ellas, no fueron los mismos, las cooperativas RL como señalamos antes, fueron inspiradas como un mecanismo paliativo del conflicto agrario nacional, en un intento de neutralizar las fuerzas de los campesinos parceleros. Sin embargo, o por eso mismo, no se definió una estrategia de desarrollo cooperativo capaz de permitirle optar a la generalidad del campesinado parcelero a la cooperación, ni se impulsó la creación de otras formas asociativas entre los campesinos sin tierra. El objetivo no era fortalecer una vía de desarrollo para la producción campesina, sino impedir que campesinos parceleros, en zonas de conflicto agrario, se pudieran acercar al descontento de los campesinos desposeídos de tierra.

Para los pequeños propietarios agrarios, especialmente los ubicados en productos destinados al mercado externo, la posibilidad de organizarse en cooperativas se vinculó a la necesidad de lograr un mayor control sobre sus propios excedentes, y a la opción de conseguir créditos y donaciones que les permitieran acceder a recursos productivos que individualmente no los podían obtener. No estuvo entre sus planteamientos el acceso a la tierra, puesto que ellos mismos eran pequeños propietarios.

A partir de 1979 se da un viraje en esta concepción, tanto de parte del Estado como del campesinado. Lo primero a señalar es que la organización cooperativa se convierte en un movimiento de masas (10), y en ese sentido desborda los márgenes estrechos del cooperativismo tradicional que le precedió, circunscrito a los propietarios de tierra.

En las nuevas condiciones en la que se

masifica el movimiento cooperativo, el Estado no está pretendiendo conservar la estructura de tenencia de la tierra ni negarles recursos al campesinado; y los campesinos demandan no sólo el control de sus excedentes, como también el control de la tierra y los recursos productivos para hacerla producir. Hay, en ese sentido, una coincidencia, entre los objetivos que tiene fijado el Estado en su política agraria, y las demandas que plantea el campesinado. Pero la coincidencia tiene un carácter general, que también pasa por la contradicción entre lo que el campesinado espera de la revolución, y otras políticas estatales, tal es el caso de la política de Unidad Nacional y la de formación de las empresas estatales. En ambos casos, la coincidencia de objetivos Estado/campesinos, se ve tensionada por los otros dos objetivos generales de la política agraria estatal, ya que los dos reducen la oferta de tierras, recursos económicos y técnicos disponible para la satisfacción de la demanda campesina.

Además, en el pasado, el cooperativismo se había restringido al campesinado propietario, y con la revolución se dislocó el ámbito de influencias preferentemente hacia el campesinado sin tierras.

Por otro lado, sobre las opciones, habría que apuntar que el Estado revolucionario, que recién se instalaba en el poder, y que era consciente de lo escaso de sus recursos y del atraso económico, social y político del campesinado, se plantea la necesidad de *"la conversión del campesinado individual primitivo y atrasado, en un campesino cooperativizado... Campesino asociado que está, por lo tanto, en una fase de transición del capitalismo y de las formas anteriores del capitalismo, hacia formas de trabajo asociado"*. (11) Es decir, había una preferencia por un modelo de producción que transitara hacia modos de producción colectivos.

Por eso en la Ley de Cooperativas, emitida en mayo de 1980, se señala en la sección segunda, "Naturaleza y Objetivos Generales de las Cooperativas" que

"La cooperación agropecuaria es una forma superior de organización del trabajo que impulsa el espíritu de solidaridad y cooperación superando las relaciones de explotación entre los hombres. Se forma a partir de la asociación voluntaria de pequeños y medianos productores, que se unen para llevar a cabo actividades relacionadas con la explotación agrícola y/o pecuaria y así cumplir los siguientes fines:

a) Facilitar la participación activa y organizada del campesinado en el proceso de Reforma Agraria...

b) Elevar el nivel organizativo, económico y social de los miembros...

c) Incrementar la producción y la productividad creando las condiciones necesarias para la utilización del riego, mecanización y tecnología moderna en general, facilitando la prestación de servicios de crédito, asistencia técnica, compra y almacenamiento de las cosechas y abastecimiento de productos básicos...

d) Estimular la participación de los miembros en actividades de servicios complementarios a la actividad productiva...

e) Fomentar la capacitación técnica de la mujer a través de su integración consciente en la gestión económica y social de la cooperativa".

principales objetivos romper con la secular explotación del campesinado por la falta de tierras y recursos; avanzar más allá de la organización de los pequeños propietarios incluyendo a los sin tierra como beneficiarios de la cooperativización, redistribuyendo, no sólo la tierra, sino también los recursos productivos y técnicos.

III. EL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO COOPERATIVISTA.

Hasta ahora señalamos en términos muy generales los modelos de cooperativización que han existido y existen en el país, así como los objetivos que el cooperativismo ha perseguido. Hemos intentado describir la generalización del movimiento cooperativo a partir del triunfo de la revolución, y la coincidencia en general de las aspiraciones campesinas con la voluntad política de la revolución.

Pero como todo fenómeno político, el comportamiento del campesinado hacia las cooperativas después del triunfo de la revolución, no ha sido uno sólo en cada estrato, ni en el tiempo ha existido una sola respuesta; a los campesinos sin tierra semiproletarizados y a los trabajadores asalariados les ha atraído sobre todo el modelo CAS o los CT, mientras a los campesinos con tradiciones de agricultura individual, especialmente a los campesinos medios y ricos, los modelos que más los ha atraído son las CCS y las CSM (Merlet: 1987; DGRA: 1986).

Del Estado podríamos señalar que su actuación en el terreno del cooperativismo ha venido sufriendo constantes cambios, y aunque ha mostrado siempre un mayor agrado por el modelo CAS, no siempre el apoyo estatal que se les ha destinado les ha privilegiado por encima de todos los otros modelos, aunque en general es muy obvio que las CAS son el modelo que se pretende sea el hegemónico entre el campesinado.

Aún antes que la derrota militar del somocismo se hubiera concretado, en los territorios liberados se organizaron las cooperativas de producción y/o comunas agrarias.

Es decir, la Ley definía como uno de sus

Las tierras las invadían los campesinos sin tierra y los obreros agrícolas, usufructuándolas sin un título de propiedad emitido por el Estado (12), y muchas veces sin su sanción. Se expresaba la situación típica de toda revolución, cuando ella misma se convierte en fuente de derecho, y los trabajadores el sujeto que lo ejerce sin más formalidad que la voluntad colectiva.

Los cooperativistas en la mayoría de los casos fueron trabajadores que no poseían tierras, salvo en muy contadas excepciones, cuando grupos de parceleros unieron sus lotes para formar una cooperativa de producción. Estas CAS de pequeño propietarios que colectivizaban voluntariamente sus propiedades nacieron generalmente entre campesinos que tenían una vinculación orgánica con el FSLN desde muchos años atrás.

Sin embargo, la formación de las cooperativas de producción, aún cuando era notoria la simpatía que despertaban como modelos hacia el socialismo entre la dirigencia revolucionaria, no conllevó a que se establecieran políticas claras para atenderlas, e iniciaron su desarrollo con muchas expectativas pero sin una definición precisa de su futuro.

De ahí que cuando se inició la formación del Área Propiedad del Pueblo (APP) a finales de 1979 e inicios de 1980 (13), muchas de estas cooperativas fueron destruidas para convertirlas en fincas estatales, y sus asociados regresaran a su calidad de obreros, y los que se resistieron a la proletarianización retomaron su status de campesinos sin tierra.

En la mayoría de los casos la decisión de estatizar un área en la que se había formado una cooperativa, se debió a la consideración de que se trataba de tierras de mejor calidad y con recursos productivos privilegiados, que podían promover, por la vía de los ingresos, diferenciación entre grupos de campesinos; en otros casos se consideró que por ser propiedades que contaban con niveles muy altos de tecnificación, el campesinado no estaba en condiciones de dirigirlas, (Wheelock: 81) amena-

zando con destruir una propiedad especialmente estratégica para la economía nacional. (14)

El cambio de política que significó la liquidación de algunas de las más importantes CAS, surgidas durante la misma insurrección o en los primeros meses posteriores a la victoria, no se debió solamente a un intento de optar por la estatización de la propiedad agropecuaria. También pesó en esta decisión la política de unidad nacional, que vino a frenar el proceso de formación de las cooperativas de producción, ya que el desarrollo de ellas estaba montado en la confiscación o expropiación de las grandes propiedades capitalistas, tuvieran o no relaciones con la dictadura recién derrotada. (15) Sucedió que para el campesinado sin tierras, la política de unidad nacional resultaba una ironía incomprensible, frente a su demanda de tierras y las expectativas que la revolución les había abierto.

Se registró entonces, a partir de la política de dotar el área estatal de las mejores propiedades y sostener el respeto a la unidad nacional, una reducción del modelo de cooperativización CAS, o cuando menos un freno a la dinámica de su desarrollo (MERLET: 1987). Sobrevivieron a esta ofensiva estatizante y de unidad nacional, las cooperativas formadas, sobre todo, por grupos de campesinos con fuerte tradición de lucha por la tierra, lo que se puede traducir en un argumento de que la cooperativización estaba más allá de la política estatal. De hecho las CAS frenaron su desarrollo por más de un año, hasta que se promulgó la Ley de Reforma Agraria en 1981. Entre 1980 y julio de 1981, las CAS y los CT disminuyen un 22% (DGRA: -1986).

La Ley de Reforma Agraria de 1981 va a servir de referencia jurídica y política para el fortalecimiento nuevamente, de las cooperativas de producción. La Ley fue emitida con un fuerte tono de privilegio hacia la asignación de tierras en forma de cooperativas especificándose en cada uno de los acápites de asignación que la Ley señala, la preferencia por la formas asociativas.



Se hizo sentir con tanta fuerza esta voluntad expresa de la Ley, que las CAS, que en 1982 poseían menos del 2% del área en fincas del país (16), al finalizar 1984 habrían llegado al 8%. En ese mismo período las CCS prácticamente no registraban cambios en el control de la tierra, permaneciendo entre los dos períodos con el 10% del área en fincas nacionales.

La distribución masiva de tierras después de 1982 va a promover la organización de un tipo de CAS más permeable a la voluntad que del Estado, diferenciándose de las que se habían mantenido de forma precaria hasta entonces, y que normalmente tenían una larga trayectoria de lucha por la tierra. Las CAS de este tipo van a mostrar un grado mayor de independencia con respecto al Estado, definiendo ellas mismas su propia política de producción. En cambio con los nuevos cooperativistas el Estado estaba en condiciones de imponerles ciertas normas de organización, como obligarlos a aceptar la cooperativa de producción, y seguir sus orientaciones en cuanto a los planes de producción.

A partir también de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria, surgen las primeras Cooperativas de Surco Muerto, como una opción intermedia para quienes no aceptan las CAS, y como una alternativa, vista por la revolución, de más rápido tránsito hacia formas colectivas de producción.

A fines de 1982 se definió la Estrategia de Desarrollo Cooperativo, que constituyó el primer esfuerzo por ordenar el crecimiento del cooperativismo en el país. Entre los componentes de dicha estrategia, los más importantes fueron la definición de las Zonas de Desarrollo Cooperativo, que pretendía fijar territorios que pudieran actuar como polos de la promoción cooperativa, y la política de Priorización de Cooperativas, que, con igual sentido de la anterior, se dirigía a distinguir organizaciones que sirvieran de ejemplos para el movimiento cooperativo en conjunto.

La estrategia, aunque pensada para todas las formas de cooperativización, en la práctica revirtió en un apoyo preferencial

para las CAS, las que se consideraron como la forma superior de organización campesina. Un ejemplo de este fenómeno lo constituyó, además de la política preferencial de tierras, el apoyo crediticio a las cooperativas CAS, las que pasaron de recibir el 5% de la masa crediticia en 1981, al 28% en 1985, mientras las CCS no modificaron el porcentaje recibido (BND: 1981-1985).

Pero a pesar de la atención especial que recibieron las CAS, el campesinado no respondió a ellas de forma unánime. Importantes sectores de campesinos pobres, con tradición de hacer agricultura por cuenta propia, se resistieron a aceptar un modelo con tan notoria intromisión del Estado, especialmente por efectos de la política de control de precios al productor, que hasta 1986 se impuso al campesinado, y de manera especial a las cooperativas.

En 1985 se estimaba (17) que por lo menos la mitad de los beneficiados en CAS se había retirado de las cooperativas, y había sido sustituido por nuevos asociados. La tendencia parecía indicar que los obreros agrícolas optaban con más facilidad por las CAS, mientras los campesinos pobres, que habían rechazado su alternativa de proletarianización, tendían a resistirla.

A este cuestionamiento del modelo CAS, nacido entre quienes habían sido escogidos como beneficiarios por el Estado, se sumaron contradicciones que tensionaban el éxito de las CAS.

Del lado del Estado preocupaba especialmente el uso inadecuado de los excedentes, por la tendencia a ser consumidos individualmente. Esta práctica se oponía a una política diseñada a consolidar un modelo apoyado en sus propias fuerzas, mientras se perpetuaba una dependencia económica que afectaba la capacidad financiera del país.

Visto desde la óptica campesina, se puede señalar como problema de mucho peso la sub-utilización de la fuerza de trabajo familiar, a tal grado que los hijos y la mujer de los socios no tenían opción

a integrarse en la cooperativa, viéndose obligados a la proletarianización agrícola o a la migración urbana en busca de trabajo.

Lo más serio de esta problemática resultó saber, que apesar de esa política discriminatoria al núcleo familiar del asociado, casi el 10% de la tierra asignada a las cooperativas se encontraba ociosa en 1985 (DGRA:1986). Por esta vía se sub-utilizaba la tierra asignada por el Estado, generando una contradicción adicional entre el campesinado que aún no era beneficiado por la Reforma Agraria, quienes comenzaron a identificar a ciertas cooperativas como propietarios ociosos, y por lo tanto, candidatos a ser afectados por la misma Reforma Agraria que los había beneficiado.

Sin embargo el número de CAS y sus socios se mantuvo en ascenso, en parte porque muchas CCS y CSM se convirtieron en CAS para disfrutar de la atención que éstas recibían del Estado, pero también porque la guerra estimuló la formación de cooperativas de producción, vía la organización de las Cooperativas de Auto Defensa (CAD) (18), que resultaron unidades de producción con mejores posibilidades de defender el territorio de la cooperativa ante la agresión mercenaria. (19)

Otro factor que promovió la organización de CAS fue el cambio de la política estatal de selección de los que debían ser beneficiados por la Reforma Agraria. Hasta 1984 la selección la realizaba el MIDINRA, previa consulta con las organizaciones campesinas, pero le correspondía a él en última instancia señalar las áreas y las formas de organización a ofertar a cada demandante. En muchos casos esta política encontró una resistencia terca de importantes sectores del campesinado que rechazaron la organización en cooperativas, aún cuando esto significaba no acceder a la tierra.

A partir de 1985 la selección y la asignación quedó en manos de las organizaciones campesinas, las que tenían que decidir quién recibía la tierra y qué modalidad de organización era conveniente. Por este proceso

muchos campesinos optaron por aceptar el modelo CAS, tanto por las ventajas económicas que implicaba, como por la dificultad de seleccionar quiénes serían los beneficiados con las mejores tierras, o sea caso contrario con las peores. (20) Pero además, en la medida en que el campesinado mismo, en su propia comarca, definía los criterios y los asignatarios de la Reforma Agraria, el modelo CAS se flexibilizó, surgiendo áreas de auto-consumo individuales, que las CAS asignaba al núcleo familiar.

En lo que se refiere a las CCS, el Estado comenzó a promoverlas en 1980, cuando se masificó el apoyo estatal al campesinado. Se pretendió originalmente organizarlo en CCS, mientras se avanzaba en la consolidación de la economía nacional y se creaban condiciones para evolucionar hacia las cooperativas de producción.

Se define así una alternativa para campesinos propietarios, o con tradiciones de agricultor individual. El Estado va a promover para los campesinos parceleros organismos institucionales de definición, control y ejecución de los servicios de apoyo a la producción campesina y su organización; se promueven los organismos participativos locales, regionales y nacionales de los pequeños productores, donde se toman las decisiones más importantes para la producción campesina, desde la asignación del crédito hasta la política de afectación de tierras; se amplía el crédito en proporciones antes nunca vistas, pasando de 22 mil beneficiados en el mejor año del somocismo, a 97 mil en 1980. (21)

Estas políticas impactaron entre el campesinado promoviendo la formación de múltiples CCS. En 1980 se organizaron en cooperativas de crédito y servicios más de 40 mil campesinos, superando a las CAS, que en 1982 tenían apenas 7 mil afiliados.

Los éxitos que mostraron en poco tiempo las CCS, a las que acudieron masivamente los campesinos pobres, medios y ricos, parecían augurar un crecimiento sostenido del modelo. En 1981 se forma la primera organización sólo para campesinos, la

UNAG (22), concretándose una alternativa de organización para quienes no eran asalariados, y el mismo año, después de meses de consulta se promulga la Ley de Reforma Agraria. Pero como señalamos antes, la ley va a venir a privilegiar el tratamiento a las CAS, y aunque se definieron políticas de atención a las CCS, especialmente en cuanto a capacitación y asignación de recursos productivos, en la práctica no se aplicaron. Los recursos productivos se dirigieron especialmente a las cooperativas de producción, sobre todo porque se consideraba a las CCS como cooperativas de transición, que en un período más o menos corto deberían pasar a organizarse colectivamente, y de hecho la atención que recibieron algunas CCS estaba dirigida a convertirlas en poco tiempo en CAS.

La intensificación de la agresión, que generalizó la guerra en los principales territorios campesinos del país, vino a plantear con urgencia la necesidad de dar una atención especial al campesinado organizado en las CCS, quienes se constituyeron en el blanco más fácil de la contrarrevolución.

Docenas de cooperativas se ven obligadas a abandonar (23) sus territorios y asentarse en zonas más seguras, formándose los asentamientos, poblaciones enteras campesinas reubicadas en áreas compactas, donde intentan reorganizar su actividad social y productiva. En un asentamiento comparten el espacio diversas cooperativas, CAS, CCS, CT y CSM. Por ser estos asentamientos territorios en guerra, la organización militar constituye la vértebra del sistema de defensa territorial, lo que deviene en un fortalecimiento de las Cooperativas de Auto Defensa (24) al rearticularse bajo esa modalidad muchas CCS. En 1985 las CCS habían reducido sensiblemente su militancia, pasando de 52 mil en 1982 a 42 mil ese año.

Por otro lado se hace evidente al finalizar 1984, que la contrarrevolución ha logrado movilizar en sus filas a un buen número de campesinos, amenazando la base social de la revolución. Se toma conciencia que la atención priorizada a las CAS había provo-

cado la desatención del campesinado no cooperativizado, e incluso de los organizados en CCS. (25)

El trabajo político y organizativo del Estado y las organizaciones campesinas se reorienta hacia las CCS y los campesinos no cooperativizados, reconociéndose explícitamente que la política de tierra deja de ser, como la ha estado siendo hasta el momento, un instrumento para coaccionar (CARRION: 1986) la organización del campesinado en las cooperativas de producción. (26)

Este cambio de políticas permite que aparezcan entre cooperativas y campesinos no organizados nuevos lazos de cooperación, como las asociaciones por rubro (27), cuya condición de unión es la comercialización y la gestión de servicios; otros modelos de cooperación incluyen asociaciones de diversas CCS que compran en conjunto medios de transporte y tractores, o que se unen para ofertar juntas sus productos al mercado.

Las cooperativas RL son reconocidas en esta nueva etapa como una realidad que no se puede obviar, definiéndose un tratamiento especial para ellas, sin intentar encasillarlas dentro de los criterios de la Ley de Cooperativas. En la actualidad existen 53 Cooperativas RL con más de 14 mil asociados (DGRA: 1986).

Pero más allá de estas nuevas alternativas, el Estado ha reconocido que el modelo CAS no es la única opción para el campesinado, y mucho menos la más apropiada. La escasa participación del campesinado y la alta integración de los obreros agrícolas en las CAS, amenaza así mismo al resto de la producción agropecuaria, restándole fuerza de trabajo asalariada a las empresas estatales y privadas, en una vía por la cual la Reforma Agraria siempre va a encontrar quien demande un pedazo de tierra, de manera que ésta pueda durar hasta que todos tengan su lote donde sembrar.

Por otro lado las CCS, a pesar de que no habían contado con gran apoyo estatal, se

mostraban eficientes, promoviendo la preocupación por conocer su problemática, al mismo tiempo que se les acepta como alternativas viables en ellas mismas, y no solamente formas de transición hacia las CAS.

IV. PRINCIPALES EXITOS Y LIMITACIONES DE LAS COOPERATIVAS.

El cooperativismo pre-revolucionario no jugó un papel importante en la producción agropecuaria del país. No generó una dinámica de movilización campesina, ni fue importante por el número de asociados que alcanzó, ni por su peso en la producción.

El movimiento cooperativo nacido con la revolución, por el contrario, se ha convertido, con todo y sus limitaciones, en la base consolidada y más importante con que cuenta la revolución en el campo. Este hecho las hace uno de los blancos predilectos de los atentados militares de la agresión externa (28), generando al mismo tiempo una respuesta campesina de autodefensa.

Si tratáramos de medir lo anterior en términos políticos, habría que señalar que a principios de 1985 se encontraban organizados en Cooperativas de Auto Defensa más de 10 mil campesinos, sin contar con miles de cooperativistas movilizadas en la defensa bajo otras variantes de participación popular, lo que significa prácticamente el ejército campesino grande de América Latina, y el campesino, también, de mayor integración revolucionaria.

Sobre las cooperativas de la revolución existen varias fuentes de información estadística que permiten aproximarnos en el tiempo a la evolución del movimiento; entre las principales están el Censo Cooperativo de 1982 y recientemente el Registro de Cooperativas del ciclo agrícola 1985/1986.

Con respecto al primer Censo y el Registro de Cooperativas, encontramos diferencias metodológicas entre ellos, que dificultan la comparación. Con todo es posible,



Cooperativa de Auto-Defensa.

para las informaciones generales, encontrar coincidencias entre las metodologías de ambos trabajos, que posibilitan algunas comparaciones. (Ver anexo estadístico). - Con respecto a las cooperativas RL no existe información ya que no se les ha estudiado, especialmente por que se creyó que eran modelos que se extinguirían más o menos rápidamente.

Número de Cooperativas y Socios:

Habíamos señalado que la política agraria de la revolución definió al movimiento cooperativo como uno de los ejes del proceso de transformaciones estructurales que demanda la economía nacional, de ahí

el apoyo especial del Estado hacia las cooperativas.

El apoyo estatal ha permitido, con respecto al número de afiliados, que las cooperativas hayan podido sostener su militancia, a pesar de los efectos de la guerra. En 1982 estaban organizados en cooperativas cerca de 65 mil campesinos, y durante 1985 se llegó a los 76 mil, cantidad cercana al 22% de la PEA agropecuaria (29), y al 40% de las familias campesinas del país.

El crecimiento se registró a pesar de que durante 1983-1985 se vieron obligados a desplazarse por la guerra, de sus zonas

tradicionales de residencia, más de 40 mil familias campesinas, significando un tropiezo de grandes dimensiones, no sólo a la organización cooperativa, como a la economía nacional.

La insistencia en el papel jugado por la guerra se debe al hecho de que el 52% de las cooperativas y el 60% de los cooperativistas viven en el territorio donde la guerra es el eje de la vida diaria de la población (DGRA: 1986).

Los modelos de cooperativas han resistido la agresión con diferentes tonalidades, mostrando una capacidad mayor de adaptación al fenómeno de guerra, especialmente las cooperativas de producción, por su capacidad de combinar la organización productiva con las tareas de la defensa.

Las CCS sometidas a la presión militar de la agresión, se redujeron de más de 1,600 en 1982 con 53 mil socios, a 1,538 con 48 mil socios en 1985. En cambio las CAS pasaron de 500 cooperativas con 7 mil socios en 1982, a 1,110 CAS con 22,823 afiliados en 1985.

Los Colectivos de Trabajo que en 1982 eran apenas sesenta con 680 miembros, en 1985 eran 354 con 2,769 afiliados. Las Cooperativas de Surco Muerto, que han sido una de las variantes de asignación de tierras más importantes, pasaron de 12 CSM con 208 socios en 1982, a 104 con 2,459 miembros en 1985. En el caso de las CSM, su crecimiento real se vió menguado por el hecho de que muchas de ellas que se iniciaron como tal, en el curso del tiempo se convirtieron en CAS, promovidas por las ventajas que el Estado puso a disposición de las formas colectivas de producción.

Tenencia de la Tierra:

En cuanto a la tenencia de la tierra las cooperativas controlaban 1.100 mil manzanas en 1982, mientras en 1985 llegaron al millón 700 mil, cantidad que representa el 21% del área en fincas nacionales.

Las CAS han evolucionado mejor también

en este aspecto, pasando de 110 mil manzanas en 1982, a más de 600 mil en 1985; mientras las CCS aumentaron sus áreas en muy poca cantidad: de 870 mil manzanas en el ochenta y dos, a 940 mil en 1985.

Producción:

En cuanto a la producción, el área sembrada muestra cambios notorios con respecto a 1982. En 1985 el área de agroexportación de las cooperativas significó el 17% del área nacional dedicada a estos cultivos, creciendo en 1985 al 24%. En los productos de consumo interno se pasó del 37% en 1982 al 41% en 1985. (30)

Vista la producción en el interior del movimiento cooperativo, en 1982 la producción para el consumo interno representó el 78% de toda el área cooperativizada, pasando en 1985 al 67%, mientras la producción de agroexportación evolucionó del 17% en 1982, al 23 en 1985 (BAUMAISTER y PEREIRA: 1984 MIDINRA: 1985).

La diferencia de pesos, entre los dos períodos, de la agricultura de mercado interno a la de exportación, refleja cambios en la concepción que desde el Estado se tenía de las cooperativas. Durante los primeros años de la revolución se pretendió mantener a los campesinos cooperativizados como tradicionales productores de alimentos, mientras la agroexportación quedaba en manos del Estado y los capitalistas grandes. A partir de 1983 esta concepción se modificó, especialmente por la resistencia del campesinado a someterse a una política de tal naturaleza.

En cuanto a los rendimientos por área sembrada, las cooperativas muestran la siguiente evolución en los principales productos agrícolas (MIDINRA: 1982/1985): en 1982, mientras a nivel nacional los rendimientos de café eran de 980 libras oro por manzanas, las cooperativas producían 490 libras. En 1985 los rendimientos nacionales se conservaban en el mismo nivel, mientras las cooperativas habían aumentado a 784 libras.

En el área sembrada de algodón la participación de las cooperativas en 1982 era insignificante. En 1985 las cooperativas registraron los mismos rendimientos que la media nacional.

En maíz, los rendimientos de las cooperativas entre 1982 y 1985, que normalmente siembran de secano, son ligeramente inferiores a los del área estatal, que siembra con riego, e igual sucede con el caso del frijol. En el caso del maíz, las cooperativas pasaron de 1.540 libras por manzanas a 2.240 libras, entre 1982 y 1985. En frijol el cambio fue de 980 libras por manzanas a 1.260.

Crédito:

En el uso del crédito rural (33) de corto plazo, las cooperativas han tenido el siguiente comportamiento: en 1981 las CAS controlaban el 5% del crédito a corto plazo, mientras las CCS accedían al 30% del mismo. El resto del crédito rural estaba en manos de campesinos no cooperativizados. En 1985 esta situación se había modificado: el 28% lo controlaban las CAS, mientras las CCS continuaban con el 30%.

En el crédito rural a largo plazo, en 1981 las CAS no lo utilizaban, mientras las CCS accedían al 9%; en 1985 las CAS controlaban el 9% mientras las CCS bajaban al 6%.

En área financiada, en 1982 las CAS participaban con el 7% del área nacional que recibía crédito del sistema financiero, y las CCS tenían el 28%. En 1985 las cooperativas habían aumentado su participación: las CAS tenían el 16% del área nacional y las CCS el 34% (SFN: 1982/1985).

La cuantificación anterior, pone a la muestra cambios cuantitativos entre dos tiempos de la cooperativización, en los que el movimiento ha mostrado un gran dinamismo, aunque todavía arrastre limitaciones que lo afectan y dificultan su desarrollo económico. Sin embargo en el caso nicaragüense puede afirmarse que el movimiento cooperativo ha respondido a las expectati-

vas con las que se ha promovido.

PRINCIPALES PROBLEMAS

Entre los problemas principales que enfren tan las cooperativas, encontramos que existen diferencias entre los distintos modelos de cooperativas, ya que los niveles de gestión que cada uno de los modelos implica, están marcados por las formas privadas de tenencia de la tierra o las formas colectivas. Sin embargo existen problemas comunes.

La Ley de Cooperativas es uno de ellos, pues ya no se adapta al desarrollo que han experimentado las cooperativas en los últimos años, resultando contradictoria con las necesidades de su desarrollo (MERLET: 1987).

Otro problema de todos los modelos cooperativos es la atención de diversos organismos estatales que, tienden a duplicar sus acciones incidiendo en la calidad de la atención a las cooperativas.

Los principales problemas que las CAS arrastran son:

- Existe una contradicción no resuelta, entre la lógica individual de la unidad de producción familiar campesina, y la colectivización de las CAS, lo que promueve dificultades para que los campesinos se identifiquen con la propiedad colectiva de la tierra;
- La alta integración de ex-obreros agrícolas a las CAS desvirtúa su concepción de modelo dirigido al campesinado;
- Dificultades para la integración del núcleo familiar, especialmente en CAS con alta renta diferencial, que lleva a los socios a optar por la contratación de trabajadores asalariados en vez de la integración de la familia;
- Poca flexibilización del modelo, que permita conjugar los intereses colectivos con los individuales, reduciendo la desertión y facilitando la consolidación de las CAS;



- El bajo nivel cultural de los socios, que promueve la sustitución de los cooperados por los activistas de UNAG y Reforma Agraria;

- Las dificultades de implementar la democracia interna. Un ejemplo de esto lo constituye la rotación en las juntas directivas, ya que cuando el socio se está capacitando en aspectos técnicos o contables, una nueva elección lo cambia por otro que necesita comenzar su capacitación. Subsisten además problemas de dirección vertical, ingerencia estatal y diseños de organización sofisticados que dificultan la gestión cooperativa; *es pm*

- Las CAS adolecen aún de un proyecto económico propio, capaz de integrarse territorialmente con los programas nacionales o regionales de desarrollo.

- La política de comercialización y acopio del Estado tiende a confrontar a las cooperativas con la gestión estatal, en la medida que no se corresponden los términos de intercambio de los productos agrícola-

las con los industriales, o que se desabastece de insumo productivo y bienes de consumo campesino a los cooperados, en momentos en se les somete a regulaciones y control de su producción.

- Las políticas de remuneración diaria de los socios de las CAS son incoherentes, promoviéndose criterios desiguales que desestimulan la productividad del trabajador;

- Debilidad de los programas sociales encaminados a la autoconstrucción de la vivienda y a la nuclearización de los socios en pequeños poblados que posibiliten la atención social de la familia del cooperado;

En el caso de las CCS y las CSM señalaríamos como fundamentales los siguientes problemas:

- La desatención que han tenido por parte del Estado, que ha influido en la dificultad de acceder a los recursos técnicos y financieros con la agilidad que su demanda ha requerido. En parte este problema viene de la consideración en la Estrategia

de Desarrollo Cooperativo, de que las CCS eran modelos en transición a CAS;

- Gran heterogeneidad interna, que ha llevado a la formación de CCS con participación de campesinos de todos los estratos, e incluso algunos burgueses agrarios pequeños;

- Mucha dispersión territorial, que dificulta la comunicación entre los socios de la misma cooperativa. Esta situación contribuye a concentrar las decisiones de la cooperativa en manos de unos pocos socios, desvirtuando el sentido de la organización cooperativa;

- Igual que en el caso de las CAS, los activistas de la UNAG y del Estado tienden a sustituir la gestión de los cooperados;

- La política de comercialización y acopio del Estado incide negativamente en la cohesión de la cooperativa, forzando a sus asociados a buscar alternativas individuales que les permitan lograr mejores precios en el mercado;

- Falta de un proyecto económico en las CCS;

- Falta de inversiones colectivas en infraestructura, equipos y maquinarias.

V. ALTERNATIVAS DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO.

La principal alternativa para enfrentar los problemas de su desarrollo, ha sido para las cooperativas, el fortalecimiento de su capacidad de gestión, rechazando la ingerencia de los técnicos del Estado en su vida interna. No se ha tratado de una negativa a relacionarse con el Estado, ni a recibir su apoyo. Se ha tratado, por el contrario, de un esfuerzo por concretar un modelo de producción cooperado independiente.

Ejemplo de esto lo ha constituido el rechazo a la cooperación forzada, a la política de control de precios, y el fortalecimiento de relaciones entre las cooperativas, que

complementan su actividad productiva, económica y social, como una alternativa frente al mercado (35), al control de precios y las limitaciones que enfrenta el país por la problemática de la guerra.

Sin embargo, su coordinación con el Estado continúa siendo vital para su desarrollo, y de ahí que también para su existencia.

En los últimos meses la política estatal se ha dirigido especialmente a dar atención a las cooperativas en cinco aspectos:

- 1) Dotar a las cooperativas de un proyecto económico propio, acorde con los proyectos nacionales de desarrollo.

Las principales acciones en esta dirección pretenden incorporar a las cooperativas en los planes de Desarrollo Económico Territorial, impulsando los proyectos de inversión en los distintos modelos cooperativos.

- 2) Mejorar y consolidar la organización interna de las cooperativas.

Se pretende mejorar la capacitación, de manera que se eleve la calidad de la gestión cooperativa; perfeccionar los métodos de participación democrática de los socios en la cooperativa; involucrar a los cooperativistas en proyectos de mejoramiento social; y perfeccionar en las zonas de guerra los sistemas de autodefensa territorial.

- 3) Promover las acciones de colaboración entre las cooperativas.

Fomentar las Uniones de Cooperativas en torno a la comercialización, buscando como acceder directamente a los consumidores, así como la adquisición en conjunto de medios de transporte y mecanización agrícola.

- 4) Establecer criterios jurídicos que normen las relaciones del Estado con las cooperativas;

Flexibilizar la Ley de Cooperativas eliminando los artículos contradictorios, así como promover una legislación acorde con

el grado de desarrollo alcanzado por las cooperativas; así mismo establecer las obligaciones de las cooperativas, especialmente en la recaudación fiscal.

5) Establecer criterios de atención únicos para el movimiento cooperativo, tanto en

terreno económico, como en lo social y lo político.

Estos criterios deben eliminar la atención múltiple a las cooperativas por distintos aparatos estatales, que en muchos casos duplican sus funciones.

NOTAS

(1). Antes del triunfo de la revolución no existió propiamente un movimiento campesino. El Partido Socialista Nicaragüense durante la década del sesenta realizó actividades de organización campesina en todo el país, y en 1964 llevó a cabo un congreso campesino en el que participaron más de 500 delegados. El FSLN durante más de 18 años realizó esfuerzos en el mismo sentido, sin embargo, tanto el trabajo del Partido Socialista como el del FSLN no llegaron a configurar un movimiento campesino, ya que todos los esfuerzos fueron aplastados por la represión.

(2). El MIDINRA tiene una red de funcionarios ministeriales, a nivel territorial, que atienden el trabajo de la Reforma Agraria. Estos funcionarios atienden al movimiento cooperativo como una de sus principales actividades, y a través de ellos el Estado intenta planificar la producción campesina a nivel territorial. La actuación de estos funcionarios ha sido señalada muchas veces como ingerencia del MIDINRA en la vida interna de las cooperativas.

(3). El Censo Cooperativo de 1982 señaló que en las CAS el 48% de los socios eran campesinos y el 52% ex-asalariados. Al respecto ver Baumaister, E. y Pereira, C., "Reflexiones sobre el avance del movimiento cooperativo en el sector agropecuario", revista **Revolución y Desarrollo**, MIDINRA, número 1, 1984.

(4). El 7% del área de las CAS es utilizada en forma individual, según el Registro Cooperativo de 1985, realizado por la Dirección General de Reforma Agraria.

(5). El país, posee 11.1 millones de hectáreas,

de las cuales la mitad son tierras vírgenes de frontera agrícola.

(6). En el mejor año del somocismo, en 1978, el crédito al campesinado benefició a 22 mil familias campesinas. El primer año de la revolución el Sistema Financiero otorgó crédito a 97 mil familias campesinas.

(7). La comarca es el territorio político más pequeño de un municipio, en el que vive un determinado número de campesinos, en una pequeña población, o dispersos en el territorio.

(8). Las CCS colectivizan el 9% del área que poseen.

(9). La Ley de Cooperativas, aún cuando resultó muy inadecuada para el funcionamiento de las cooperativas, ha sido aplicada con flexibilidad de parte del Estado, que no ha exigido una aplicación rígida de la Ley. De ahí que surgieran modelos de cooperativización que no se adaptan a los señalamientos de la Ley.

(10). Cinco meses después del triunfo de la revolución, en Diciembre de 1979, funcionaban en el país 392 CAS con 13 mil socios, y 18 CCS con 629 afiliados. Información presentada durante la Asamblea Nacional Constitutiva de la Asociación de Trabajadores del Campo, Diciembre de 1979.

(11). Esta posición sobre la cooperativización está descrita en "El marco estratégico de la reforma agraria", Wheelock, Jaime. DEPEP, Sección de Propaganda, Octubre de 1981.

(12). El primer título de Reforma Agraria fue

- emitido por el Estado en Octubre de 1981, dos años y tres meses después del triunfo de la revolución.
- (13). Las empresas estatales se comenzaron a organizar en los primeros meses de 1980, consideradas entonces como el eje del modelo de acumulación en el agro, de ahí que se optó en algunos casos por desplazar a grupos campesinos que se encontraban asentados ahí en cooperativas. Ver al respecto, Wheelock, Jaime "Reforma Agraria y Revolución", UNAG, 29 de Enero de 1981.
- (14). Wheelock, Jaime. Idem.
- (15). El programa de gobierno lanzado por el FSLN en 1979, un mes antes del triunfo de la revolución, establecía la confiscación de las propiedades de Somoza y los que habían cometido delitos contra el pueblo. Esta medida no afectaba a centenares de capitalistas, propietarios de tierras, a los que el campesinado consideraba enemigos, de manera que resultaba difícil entender porqué no se les debía confiscar. Hasta febrero de 1980 los campesinos invadieron más de un millón de hectáreas mil manzanas, las que representan casi el sesenta por ciento de las tierras que han sido afectadas hasta el día de hoy.
- (16). Hasta 1984 la Reforma Agraria había entregado 600 mil manzanas a las CAS, y 50 mil manzanas en forma individual.
- (17). Registro de Cooperativas, 1985, Dirección General de Reforma Agraria.
- (18). Las Cooperativas de Auto-Defensa (CAD) surgieron en 1983, como respuesta del campesinado frente a los ataques de las bandas mercenarias, organizándose como cooperativas de producción, en las que predomina la organización militar. Las primeras CAD tuvieron su origen en CAS, pero posteriormente muchas CCS se convirtieron a esta forma de organización.
- (19). A inicios de 1985 los periódicos informaron de una infiltración de 2,000 mercenarios por la frontera con Honduras. Dos días después chocaron con el ejército. Antes habían tenido 35 combates con Cooperativas de Autodefensa.
- (20). Cuando se decidió entregar tierra en forma individual y que los campesinos escogieran como distribuírselas, surgió el problema de como decidir qué parcela le tocaba a cada beneficiario de la Reforma Agraria. Como las tierras no tienen la misma calidad, la distribución se complicaba, optando los campesinos por dejar parcelas colectivas; cuando eran tierras de mala calidad, se dejaban para ganadería, y en caso contrario para agricultura tecnificada.
- (21). La fuente de esta información son los archivos del Banco Nacional de Nicaragua.
- (22). La Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), organizó después del triunfo a los obreros y campesinos. Después de dos años, en 1981, la dirección desde una misma organización de estas dos clases originó contradicciones que dificultaban la atención política, ya que las demandas de ambas eran diferentes. En abril de 1981 los campesinos se separaron de ATC y fundaron la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG).
- (23). En 1983 y 1984 la guerra alcanzó su nivel más alto en cuanto a acciones militares, obligando al campesino a moverse de sus tierras para buscar seguridad lejos de las zonas de combate. El Estado ante esa situación se decidió por la formación de asentamientos, donde se ubicaban a los campesinos desplazados, a los cuales se les reasignaban tierras para trabajar. En 1985 los asentamientos albergaban a 250 mil personas.
- (24). En 1983 las Cooperativas de Auto Defensa estaban formadas por unos 5 mil cooperativistas. En 1984 habían llegado a los 8 mil. En la actualidad se estiman más de 10 mil cooperativistas organizados en autodefensa.
- (25). En 1984 se estimaba que la contrarrevolución tenía unos 15 mil hombres en armas, de los cuales por lo menos la mitad eran campesinos alzados, y el resto ex-guardias somocistas. En la actualidad se estima que el ejército contrarrevolucionario cuenta con unos 6 mil hombres, la mayoría de ellos ex-guardias.
- (26). El Presidente de la República, en la celebración del sexto aniversario de la revolución,

reconoció que se había estado coaccionando al campesinado para que se integrara a las CAS. Posteriormente diversas declaraciones de dirigentes de la revolución, reconocieron esta política errada del MIDINRA.

(27). Las asociaciones por rubros unen a productores de un mismo producto, para gestionar insumos, herramientas y maquinarias, así como para vender sus productos a mejores precios.

(28). Entre 1983 y 1985 cayeron en combate defendiendo sus cooperativas 281 cooperativistas, 50 fueron heridos y 950 secuestrados.

En el mismo período, 182 cooperativas fueron atacadas por las bandas contrarrevolucionarias.

(29). La PEA agropecuaria se estima en unas 350 mil personas, mientras las familias se estiman en unas ciento ochenta mil, de las cuales aproximadamente 120 mil demandaban tierras al momento del triunfo.

(30). Los productos principales de agroexportación son el algodón, café y el azúcar. En consumo interno se clasifican sobre todo el maíz, frijol, arroz, hortalizas y frutas.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

BAUMAISTER, E. y PEREIRA, C. "Reflexiones sobre el Avance del movimiento cooperativo en el sector agropecuario", revista **Revolución y Desarrollo**, MIDINRA, 1984.

BND. Banco Nacional de Desarrollo, Informes 1981 y 1985.

BNN. Banco Nacional de Nicaragua, Informe 1978.

CARRION. L. Intervención en el primer congreso campesino, UNAG. Ediciones Tierra Arada. Dirección de Comunicaciones, MIDINRA.

CIERA. Centro de Investigaciones y Estudios de la Reforma Agraria. "Cooperativas de créditos y servicios, CCS". Enero de 1985.

DGRA. Dirección General de Reforma Agraria. "Acercamiento a la problemática del movimiento cooperativo", julio 1986.

MALDIDIER, C. y MERLET, M. "El movimiento cooperativo, eje de la sobrevivencia de la revolución",

agosto 1986. Ponencia presentada en el X Congreso de la Asociación de Científicos Sociales de Nicaragua. Agosto de 1986.

MERLET, M. "Nicaragua. Cooperativismo: teoría y práctica novedosas". Revista **Pensamiento Propio**, nov./oct.) 1986, año IV número 36, Managua, Nicaragua.

MIDINRA. "Ley de cooperativas agropecuarias", mayo 1980.

Nicaragua. Informes Dirección de Economía 1982 a 1985.

SFN. Sistema Financiero Nacional. Informes 1982 y 1985.

WHEELOCK, J. "Marco estratégico de la reforma agraria". DEPEP, 18 de Octubre de 1981. Nicaragua.

UNAG, Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, "Reforma Agraria y Revolución", 29, enero 1981.

ANEXO ESTADISTICO

CUADRO 1

NICARAGUA: EVOLUCION DEL NUMERO DE COOPERATIVAS

AÑO	CAS	CCS	CSM	CT	RL	TOTAL
1978	--	--	--	--	42	42
1980	584	1,397	--	ND	ND	2,023
1982	499	1,652	12	60	ND	2,223
1985	1,110	1,538	104	354	57	3,163

FUENTE: 1978 BANCO NACIONAL DE NICARAGUA
 1980 ESTIMADO DE ATC
 1982 CENSO COOPERATIVO Y DGRA PARA RL
 1985 REGISTRO COOPERATIVO 1985, DGRA.

CUADRO 2

NICARAGUA: EVOLUCION DEL NUMERO DE SOCIOS EN LAS COOPERATIVAS

AÑO	CAS	CCS	CSM	CT	RL	TOTAL
1978	--	--	--	--	9,270	9,270
1980	9,275	48,712	--	ND	ND	57,987
1982	7,081	52,052	208	680	ND	60,021
1985	22,823	48,121	2,459	2,769	14,196	90,368

FUENTE: LA MISMA DEL CUADRO 1.

CUADRO 3

NICARAGUA: EVOLUCION DE TENENCIA DE LA TIERRA EN LAS COOPERATIVAS

TIPO DE COOPERATIVA (MZS.)	AREA 1982	AREA 1985
COOPERATIVA AGRARIA SANDINISTA	111,577	640,149
COOPERATIVA CREDITO Y SERVICIOS	871,999	969,657
COOPERATIVA DE SURCO MUERTO	4,476	30,559
COLECTIVOS DE TRABAJO	122,751	70,953
TOTAL	1,110,803	1,711,318

FUENTE: 1982 CENSO COOPERATIVO (CIERA)
 1985 REGISTRO COOPERATIVO 1985.